

Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro.

Al otrosí pendiente de resolución del escrito de folio 33: A sus antecedentes.

A los folios 37 y 38: a sus antecedentes.

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada, con excepción del párrafo segundo del considerando Décimo; los párrafos finales de los considerandos Undécimo y Duodécimo; los párrafos sexto y séptimo del considerando Décimo Tercero que comienzan con “En el Acta Constitucional”, y; en el considerando Décimo Sexto, desde la expresión “Considerando estas partidas...” en adelante, los que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

1º) Que por sentencia definitiva de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada por el 13º Juzgado Civil de Santiago, en la causa “Reyes y otros con Fisco de Chile”, Rol C-5649-2020, se resolvió: a) Acoger la excepción de cosa juzgada deducida por el Fisco respecto de los demandantes don Ricardo Antonio Orellana Orellana y doña Celestina del Rosario Reyes Ramos, con costas; b) Rechazar las excepciones de reparación satisfactiva y prescripción deducida por el Fisco de Chile, y; c) Acoger parcialmente la demanda, condenando al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, las sumas de diecisiete millones de pesos al demandante don Raúl Jacobo González Villalobos; trece millones de pesos al demandante don René Antonio Guzmán Muñoz; y quince millones de pesos al demandante don Luis Arturo Maldonado Salas, mas reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precio al Consumidor, desde que el fallo quede ejecutoriado y hasta su pago efectivo; e intereses, desde que el Fisco incurra en mora.

2º) Contra la aludida sentencia dedujo recurso de apelación el Fisco de Chile, para que esta Corte enmiende con arreglo a derecho la sentencia impugnada, revocándola y declarando que se rechaza íntegramente la demanda interpuesta en autos o, en subsidio, se rebajen sustancialmente los montos fijados a título de indemnización por daño moral.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XLTVXQTBXR

3º) Que la demandante se adhirió a la apelación, solicitando que esta Corte, confirme la sentencia con declaración que se eleve el quantum indemnizatorio conforme a las peticiones de la demanda de don Raúl Jacobo González Villalobos, don René Antonio Guzmán Muñoz y don Luis Arturo Maldonado Salas, y revoque aquella parte que acoge la excepción de cosa juzgada, acogiendo la demanda por el monto solicitado por los actores o aquella que la Corte determine en relación con don Ricardo Antonio Orellana Orellana y doña Celestina del Rosario Reyes Ramos.

4º) Que la parte demandante a fin de acreditar los fundamentos de su adhesión a la apelación, acompañó en esta instancia, los siguientes documentos:

1. Copia de Norma Técnica N° 88. Para la Atención en Salud de Personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el período 1973-1990, elaborado por la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, de 30 de junio de 2006.
2. Sentencia de la Excma. Corte Suprema. Causa Rol 18.179-2019. sentencia de casación de 06 de diciembre de 2019, caratulado “Torres con Fisco”.
3. Sentencia de la Excma. Corte Suprema. Causa Rol 18.179-2019. sentencia de reemplazo de 06 de diciembre de 2019, caratulado “Torres con Fisco”.
4. Sentencia de la Excma. Corte Suprema. Causa Rol 13.877-2019. sentencia de casación de 24 de diciembre de 2021, por el homicidio de don Augusto Cepeda Venegas.
5. Sentencia de la Excma. Corte Suprema. Causa Rol 13.877-2019. Sentencia de reemplazo de 24 de diciembre de 2021, por el homicidio de don Augusto Cepeda Venegas.
6. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2018.
7. Escrito de contestación del Estado de Chile en el Caso Órdenes Guerra, Rol CDH-2-2017/038, en el mes de febrero 2018, donde se reconoce responsabilidad internacional por aplicar la prescripción civil en causas de derechos humanos.



8. Copia de Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, por doña Celestina del Rosario Reyes Ramos, de 31 páginas, todas debidamente autorizadas por ministro de fe del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
9. Copia de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, página 426, correspondiente a Ricardo Antonio Orellana Orellana, Cédula de Identidad Nro. 6.291.008-7.
10. Copia de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, página 799, correspondiente a Celestina del Rosario Reyes Ramos, Cédula de Identidad Nro. 7.853.140-1.
11. Declaración Jurada de doña Camila Ruz Valencia, cédula de identidad Nro. 12.461.321-3, ante el Notario Público y Conservador de Minas de San Vicente de Tagua Tagua, don Fabian Estaban Díaz Contreras el día 19 de junio de 2024.
12. Declaración Jurada de doña María Inés Valencia, cédula de identidad Nro. 4.335.866-9, ante el Notario Público y Conservador de Minas de San Vicente de Tagua Tagua, don Fabian Estaban Díaz Contreras el día 19 de junio de 2024.
13. Informe Psicológico de Evaluación de Daño Asociado a Violencia Política, emitido por la profesional Jeannette Rosentreter Zamora, quien evaluó a don Ricardo Antonio Orellana Orellana, cédula de identidad Nro. 6.291.088-7, por los daños consecuencias de los hechos cometidos en su contra, indicando que el demandante fue diagnosticado con Síndrome de Estrés Post Traumático, sintomatología ansiosa y depresiva, entre otros.
14. Curriculum Vitae de la profesional Sra. Jeannette Rosentreter Zamora, Psicóloga Clínica titulada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con cursos de especialización en Derechos Humanos y ejercicio profesional en la misma área, figurando entre estas la participación en la Coordinación del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y DDHH entre los años 2016 al 2022 y su participación en el libro “El Protocolo de Estambul de Naciones Unidas y la investigación de la tortura y otros tratos o penas



cruelles, inhumanos o degradantes durante democracia en Chile” entre otros.

5°) Que en cuanto a aplicación de la excepción de cosa juzgada respecto de la demanda planteada por don Ricardo Antonio Orellana Orellana y doña Celestina del Rosario Reyes Ramos, ha de considerarse que en materia de prescripción de las acciones civiles derivadas de violaciones a los derechos humanos, existe asentada jurisprudencia de la Corte Suprema y de esta misma Corte, en cuanto que la obligación internacional del Estado de Chile de reparación integral a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, impide que la regulación de derecho interno del instituto de la prescripción pueda invocarse como obstáculo para la obtención de dicha reparación. En este sentido, igual razón debe predicarse respecto de la institución procesal de la cosa juzgada, que se aborda en este caso, en la cual la pretensión de seguridad y certeza jurídica a que legítimamente obedecen sus efectos, cede ante la exigencia de justicia en todo tiempo que importa la reparación integral en los crímenes de lesa humanidad.

6°) Que en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado respecto de la cuestión debatida, en sentencia de casación de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, rol N°72.024-2020, lo siguiente:

“29°) ...al aplicar el control de convencionalidad, sin ningún género de dudas, se constata la irrelevancia de cualquier excepción de cosa juzgada en relación con la acción civil que pretende la reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de esta categoría de ilícitos, por no respetar las disposiciones imperativas inherentes al derecho internacional de los derechos humanos;

30°) Que todo lo que se lleva reflexionado evidencia el error de derecho en que incurre la sentencia en examen, pues hace primar lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil sobre la normativa internacional examinada que impone al Estado de Chile el deber de reparar íntegramente las graves violaciones a los derechos humanos que demandan los familiares de las víctimas y cuya existencia no ha sido controvertida...



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XLTVXQTBXR

31°) Que, en síntesis, no se desconoce aquí la validez y legalidad de los fallos anteriores, incluso dictados por esta propia Corte que declaran la prescripción de la acción indemnizatoria contra el Estado de Chile, sino sólo se reconoce que la excepción de cosa juzgada derivada de esos pronunciamientos consagrada en el citado artículo 177, norma interna de carácter meramente legal, debe ceder ante el derecho a una reparación integral derivado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya referidos, que por disposición del inciso 2° del artículo 5° de nuestra Carta Fundamental tienen una jerarquía superior;”. (En el mismo sentido, Corte Suprema rol 36.319-2019).

7°) Que el cumplimiento de esta obligación internacional de reparación integral de las víctimas de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado de Chile, alcanza a todas sus instituciones -entre ellas al poder judicial y de la forma en que lo ha estado haciendo en su consistente jurisprudencia-, lo que debería ser adecuadamente considerado también por el ente defensor de los intereses fiscales al momento de basar su estrategia judicial en las excepciones de prescripción o cosa juzgada, a fin de precaver que el Estado de Chile no incurra en un eventual incumplimiento de sus obligaciones convencionales internacionales en esta materia.

8°) En lo que concierne a los agravios denunciados, tanto por el demandado y el demandante, sobre el monto de las indemnizaciones, estima esta Corte que debe modificarse el *quantum* concedido a los actores, pues si bien resulta acreditado que todos padecieron detenciones arbitrarias, por periodos relativamente cortos de tiempo y que en dicha condición fueron víctimas de maltratos y otros tratamientos crueles y degradantes por agentes del Estado, tal como ha sido acreditado por la Comisión Valech, deberán ponderarse también otras circunstancias al momento de establecer el monto indemnizatorio, a título de daño moral.

En particular, se debe considerar que todas las víctimas eran al momento de los hechos, personas jóvenes, sin militancia política reconocida ni figuración pública, residentes en los alrededores de San Vicente de Tagua Tagua y



Pichidegua, que fueron detenidos en forma aleatoria por agentes del Estado y sometidos a maltratos, sin explicación alguna, como podría ser la represión de la disidencia política contra el régimen militar impuesto esa época. En cambio, la arbitrariedad y aleatoriedad de dichas detenciones, realizada en una zona rural relativamente determinada, contra personas sin adscripción política, por parte de la autoridad policial, aparece como una política de atemorización general de la población, en que las víctimas fueron casos ejemplificadores para asentar el control, lo que constituye una especial forma de comisión de los delitos de lesa humanidad, que en situaciones de violencia institucionalizada, se perpetran detenciones y maltratos arbitrarios y generalizados, de manera sistemática como práctica de terror en la población.

En ese entendido, y respecto de los ofendidos Raúl Jacobo González Villalobos, René Antonio Guzmán Muñoz y Luis Arturo Maldonado Salas el monto de la indemnización de perjuicios por concepto de daño moral se elevará prudencialmente a la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).

Mismo quantum indemnizatorio, se dispondrá también respecto del actor Ricardo Antonio Orellana Orellana, en cuanto y como ya se expuso previamente, su situación particular es compatible con los fundamentos sostenidos en relación con los antes aludidos demandantes.

9°) Que, finalmente, y en el caso de Celestina del Rosario Reyes Ramos, esta Corte tendrá especialmente en cuenta, además, su corta edad a la fecha de los ataques denunciados en que contaba con sólo 15 años, que sufrió torturas por aplicación de electricidad, afectación de su indemnidad sexual y que motivada por esta situación su familia se fue al exilio; todo lo cual, desde una perspectiva de género, hace necesario considerar que la violencia sexual ejercida en su contra, constituye una especial forma de comisión de los delitos de lesa humanidad, que en situaciones de violencia generalizada o institucionalizada, se perpetra de manera sistemática como práctica de terror en la población femenina, lo que amerita una especial esfera de protección y de reparación, toda vez que los ataques y daños asociados se vinculan necesariamente a dicha identidad de género, por lo que se determina a su



respecto -por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral- la suma dineraria que se expondrá en lo resolutivo del presente pronunciamiento.

Por los fundamentos precedentes y lo previsto en el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República; la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica; los artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil y artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales, se declara respecto de la sentencia definitiva de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada por el 13° Juzgado Civil de Santiago, ya individualizada, que:

i) **Se revoca** la antes referida sentencia en cuanto acogió la excepción de cosa juzgada deducida por la parte demandada y **en su lugar**, se decide que la misma queda rechazada y que, consecuencialmente, **se condena** al Fisco de Chile a pagar: a) a don Ricardo Antonio Orellana Orellana la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos), por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, y; b) a doña Celestina del Rosario Reyes Ramos, la suma de \$100.000.000.- (cien millones de pesos), por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, en ambos casos, más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precio al Consumidor desde que el presente fallo quede ejecutoriado y hasta su pago efectivo; e intereses, desde que el Fisco incurra en mora.

ii) **Se confirma** en lo demás la referida sentencia, **con declaración** que se aumenta la suma que el Fisco de Chile debe pagar a don Raúl Jacobo González Villalobos, a don René Antonio Guzmán Muñoz y a don Luis Arturo Maldonado Salas, a \$ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos).

Se previene que el Ministro (s) Sr. Valderrama Martínez concurre a lo antes decidido, con excepción de lo referente a los intereses a cuyo pago se ha condenado al Fisco, en cuando estima que los mismos se devengarán desde que el fallo quede ejecutoriado.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo y de la prevención, por su autor.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XLTVXQTBXR

No firma el Ministro señor Crisosto, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 12.883-2023



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XLTVXQTBXR

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogado Integrante Luis Hernandez O. Santiago, veintitres de octubre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintitres de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XLTVXQTBXR